

Sobre el particular, y de modo más concreto, el artículo 11 de la Constitución, estipula que

“(...) el Estado garantiza el libre acceso a prestaciones de salud y a pensiones, a través de entidades públicas, privados o mixtas”.

Así, el derecho a la seguridad social se instituye como una garantía institucional del derecho a la pensión, al posibilitar su vigencia según los parámetros correspondientes a un Estado social y democrático de derecho.

Pero, ¿qué es en estricto una garantía institucional?

Es una fórmula constitucional que permite asegurar una especial salvaguarda de ciertas instituciones. Es decir,

“(...) no es un derecho fundamental en sentido auténtico, pero significa una protección constitucional contra la supresión legislativa, según es característico de la garantía institucional”^{1[31]}.

De esta forma, la seguridad social está prevista en la Constitución como la garantía institucional del derecho a la pensión.

3. Que, resulta pertinente recordar que el propio Tribunal Constitucional determinó en la Sentencia acotada la situación de aquellos trabajadores que antes de la Reforma Constitucional del año 2004 habían cumplido requisitos para obtener una pensión dentro del régimen del Decreto Ley 20530, descrito en el Fundamento 127:

Cuando una persona cumple con los requisitos legales para obtener una pensión dentro de un determinado régimen pensionario, y **su incorporación a dicho régimen queda consumado**, resultaría manifiestamente inconstitucional por vulnerar el principio de irretroactividad de la ley, previsto en el artículo 103 de la Constitución, y la garantía institucional de la seguridad social, reconocida en el artículo 10 de la Constitución, que en dicho supuesto, una ley futura pretenda imponerle su desincorporación.

El artículo 2 de la Ley 28449 no incurre en tal inconstitucionalidad, pues es claro en señalar que

“(...) se consideran incorporados en el régimen regulado por el Decreto Ley N.º 20530: